

AUTO NÚMERO: 036 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

El Director Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia

En ejercicio de las atribuciones legales que le han sido conferidas mediante la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, Decreto 3572 de 2011, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 476 de 2012, demás normas complementarias y,

CONSIDERACIONES

Que la Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras disposiciones, la obligación del Estado y de las personas, de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); la propiedad privada tiene una función ecológica (Art. 58); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95).

Que el artículo 79º de la Constitución Política de Colombia establece: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. De otra parte, el artículo 80 de la misma Carta Política señala, que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

Que así mismo, el artículo 328 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece que las finalidades principales del Sistema de Parques Nacionales son conservar los valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas del país, perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción, investigaciones científicas, estudios generales y educación ambiental, Mantener la diversidad biológica y estabilidad ecológica y proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos para contribuir a la preservación del patrimonio común de la humanidad.

Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en virtud del Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, teniendo como objetivo orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

Que el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, Artículo 1º creó la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, cuyas funciones están establecidas en el decreto antes mencionado. La entidad estará encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este organismo del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que de conformidad con el artículo Artículo 2.2.2.1.2. 2 del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 329 del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el sistema de parques naturales tendrá los siguientes tipos de áreas: Parque Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora, Santuario de Fauna y Vía Parque.

Que Parques Nacionales Naturales de Colombia está conformado por 6 Direcciones Territoriales, Caribe, Pacífico, Andes Occidentales, Amazonía, Orinoquía y Andes Nororientales. La Dirección Territorial Andes

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

Occidentales coordina la gestión para la conservación de 12 áreas protegidas de orden nacional, distribuidas en 2 Santuarios de Fauna y Flora: **Galeras** y **Otún Quimbaya**; un Santuario de Flora **Isla de la Corota** y 9 Parques Nacionales Naturales: **Puracé**, **Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel**, **Nevado del Huila**, **Las Hermosas**, **Cueva de los Guacharos**, **Los Nevados**, **Selva de Florencia**, **Tatamá** y **Las Orquídeas**. Dichas áreas suman una extensión aproximada de 581.036 hectáreas, representando el 0,5% del territorio Nacional Continental, y conservando diversos ecosistemas representativos de la región como volcanes, glaciares, bosques de niebla, paramo, humedales, y bosque seco.

Que de acuerdo con el Artículo 2.2.2.1.2.2, Decreto 1076 de 2015 y el Artículo 331 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), las actividades permitidas en los Parques Nacionales Naturales son las de conservación, recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura.

Que de conformidad con el Artículo 2.2.2.1.16.3 del Decreto 1076 de 2015, Decretos 2811 de 1974 y el numeral 13 del artículo 1 del Decreto 3572 de 2011, a Parques Nacionales Naturales de Colombia, le corresponde el ejercicio de funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.

Que el artículo 5° de la resolución 476 de 2012, de conformidad con lo establecido en los Artículos 2.2.5.1.12.1 y 1.1.2.1, numeral 13, del Decreto 1076 de 2015 establece: *“Los Directores Territoriales en materia sancionatoria conocerán en primera instancia los procesos sancionatorios que se adelanten por las infracciones a la normatividad ambiental y por los daños ambientales que se generen en las áreas protegidas asignadas a la Dirección Territorial a su cargo, para lo cual expedirán los actos administrativos de fondo y de trámite que se requieran”*.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo primero establece: *“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”* (negritas fuera del texto original).

Que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 preceptúa: *“(…) Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente (…)”*.

HECHOS Y ANTECEDENTES

Dio inicio al presente proceso sancionatorio ambiental, el memorando No. 20206200001593 del 28 de mayo de 2020, por medio del cual la jefa (E) del Parque Nacional Natural Los Nevados (en adelante PNN Los Nevados) **GLORIA TERESITA SERNA ALZATE**, envía a esta Dirección Territorial los siguientes documentos para que se dé el trámite sancionatorio correspondiente:

- Acta del 05 de abril de 2020, por medio de la cual el funcionario del PNN Los Nevados MARIO HUMBERTO FRANCO ORTÍZ le impuso medida preventiva en flagrancia a los señores JUAN CARLOS ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.045.106.576, LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.218.818 y YERZON MURILLO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035, consistente en suspensión inmediata de las actividades de ingreso no autorizado y de pesca no autorizada; así como el decomiso preventivo de cuatro varas de pescar, actividades que estaban desarrollando en las coordenadas Geográficas: N: 4°47'50,1» y W: 75°24'37,1", al

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

interior del PNN Los Nevados, Sector de manejo II - Los Caños, Laguna del Otún, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, en la Zona Intangible, según el plan de manejo vigente del área protegida (aprobado mediante la Resolución 0393 de 14 de septiembre de 2017).

- Auto No.001 del 08 de abril de 2020, por medio del cual el jefe del PNN Los Nevados legalizó la medida preventiva impuesta a los señores **JUAN CARLOS ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.045.106.576, **LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, **LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, **YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.218.818 y **YERZON MURILLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035, mediante acta del 05 de abril de 2020.
- Informe de Campo para Procedimiento Sancionatorio Ambiental del 05 de abril de 2020, elaborado por el Operario del PNN Los Nevados Mario Humberto Franco Ortiz, y aprobado por la jefe (E) del área protegida GLORIA TERESITA SERNA ALZATE, en el cual se manifiesta que el día domingo 5 de abril de 2020, en recorrido de Prevención, vigilancia y control, con acompañamiento de policía Ambiental y de Turismo del municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda, siendo las 11:20 encontraron a un infractor acampando al interior del PNN Los Nevados, en las con coordenadas geográficas: W 075° 24' 37,1" N 04° 47' 50.1", cerca al sector de los Caños, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, en la Zona Intangible, según el plan de manejo vigente del área protegida (aprobado mediante la Resolución 0393 de 14 de septiembre de 2017). En el sitio se observa que habían hecho una fogata; en la desembocadura de los caños se abordaron otros cuatro infractores del mismo grupo que iniciaban actividad de pesca, la cual fue suspendida, se reunió todo el grupo para orientar una charla de sensibilización ambiental e imposición de Medida preventiva consistente en suspensión inmediata de la actividad de pesca y decomiso preventivo de una (1) vara de pescar con carretel Cobra, estado o condición "malo" e identificación 18245, de color amarillo; una (1) caña de pesca Shimano, estado o condición "buena" e identificación 018-170 de color rojo con negro, y; dos (2) varas sin carretel y sin sedal, estado o condición "malo" una de color rojo oscuro - Vinotinto y otra de color azul con negro; estas actividades duraron toda la tarde hasta posterior a las 18:00 horas cuando finalmente fueron expulsados definitivamente del Área [protegida se](#) presume que los presuntos infractores realizaron el ingreso al PNN haciendo uso de un camino usado por campesinos de la zona a 500 metros de distanciarle la portada de ingreso oficial al Parque. En el lunar de la fogata. por la condición de las especies usadas (incineradas) no se logra identificar con precisión la totalidad de las especies de flora con las que se realizó la quema, destacando que se presume la quema fue realizada con especies como Cortadera (Cortaderia sp) y Pajonal (Calamagrostis efusa). En el momento de abordar a los pescadores apenas empezaban a realizar la actividad de pesca, sin haber extraído de los caños ningún individuo. Los agentes de la Policía que acompañaron el operativo impusieron los comparendos a estas personas, por incumplimiento al Decreto 457 de 2020, sobre el aislamiento preventivo obligatorio por el Covid-19.
- Informe Técnico Inicial para Procesos Sancionatorios No. 20206200001603 del 28 de mayo de 2020, elaborado por la Profesional Universitaria del PNN Los Nevados PAOLA ANDREA VILLA OROZCO, y aprobado por la jefe (E) del área protegida GLORIA TERESITA SERNA ALZATE, en el que se hicieron las siguientes conclusiones técnicas:

"Aunque la infracción no genera afectación a la condición ambiental del ecosistema y la alteración sobre los bienes de protección / conservación del área protegida es escasa, si se constituye en una alteración del ambiente Natural y alteración de la organización, según se establece en el Decreto 1076 de 2015, en los Artículos 2.22.1.15.1 y 2.2.2.1.15.2, numerales 5 y 10 para el primer artículo y 10 para el segundo; puesto que presuntamente ingresaron al área protegida por zona no permitida durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio reglamentado mediante el Decreto No.457 del 22 de marzo de 2020, época en la que también se encontraba prohibido el ingreso de visitantes

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

y prestadores de servicios turísticos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales abiertas al ecoturismo según lo establece la Resolución No 137 del 16 de marzo de 2020; asimismo, fueron sorprendidos por personal PNN Los Nevados realizando un campamento al interior del área protegida en zona no permitida, con una fogata haciendo uso de especies propias de la zona, e iniciando la actividad de pesca.

Entre las acciones realizadas para evitar la ocurrencia de la infracción se tiene la suspensión inmediata de la actividad de pesca y el decomiso preventivo de los siguientes elementos: una (1) vara de pescar con carretel Cobra, estado o condición "malo" e identificación 18245, de color amarillo; una (1) caña de pesca Shimano, estado o condición "buena" e identificación 018-170 de color rojo con negro; una (1) vara sin carretel y sin serial, estado o condición "malo" de color rojo oscuro —Vinotinto, y una (1) vara sin carretel y sin serial, estado o condición "malo" de color azul con negro; asimismo, el recorrido de vigilancia y control que permitió evidenciar la presunta infracción se realizó en coordinación institucional con la Policía Ambiental y de Turismo del municipio de Santa Rosa de Cabal(Risaralda), por lo que los funcionarios de esta entidad impusieron comparendos a tres de las cinco personas involucradas en la comisión de esta actividad y acompañaron el proceso de expulsión de las cinco personas del área protegida.

Ante la ausencia de impactos ambientales o afectaciones sobre los bienes de protección — conservación, se determina la importancia de la infracción utilizando la metodología Conesa Fernández adaptada a Parques Nacionales, la cual arroja dos valoraciones Irrelevantes para las tres conductas valoradas".

- CD con registro fotográfico de la infracción ambiental.

Mediante Auto No. 020 del 17 de Julio de 2020 se ordenó la apertura de investigación administrativa de carácter sancionatorio ambiental en contra de los señores **JUAN CARLOS ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1,045.106.576, **LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, **LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, **YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.091218.818 y **YERZON MURILLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035.

En el mismo Auto No. 020 del 17 de Julio de 2020 también se formularon cargos en contra de los señores **JUAN CARLOS ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1,045.106.576, **LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, **LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, **YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.091218.818 y **YERZON MURILLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035.

Mediante auto 002 del 14 de marzo 2023 se ordena la apertura del periodo probatorio y se adoptan otras disposiciones, dentro del proceso sancionatorio ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

1. Competencia

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

En virtud del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, la Ley 99 de 1993, el Decreto 3572 de 2011, la Resolución 476 de 2012 y demás normas complementarias, la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia es competente para resolver el presente asunto.

a) Del proceso administrativo sancionatorio ambiental

El artículo 3° de la Ley 1333 de 2009 señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

La Ley 1333 de 2009 en su artículo 5° consagra:

“Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

***Parágrafo 1°.** En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.*

***Parágrafo 2°.** El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.*

Esta misma ley en su artículo 17 consagra la etapa de indagación preliminar, con el objetivo de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental. Así mismo, en su artículo 18 establece la iniciación del procedimiento sancionatorio ambiental, el cual se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone la formulación de cargos, etapa en la cual la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado procede a endilgar cargos en contra del presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental, indicando las acciones y omisiones constituyentes de la infracción y las normas ambientales vulneradas o trasgredidas con la conducta del infractor.

El artículo 25 de la citada ley establece un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del auto de formulación de cargos para que el presunto infractor presente los descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas.

El artículo 26 de la Ley 133 de 2009 establece el periodo probatorio, mediante el cual la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad y ordenará de oficio que considere necesarias. El término de este periodo es de 30 días, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez hasta por 60 días soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

La Ley 1333 de 2009 no contemplo dentro de su procedimiento la etapa para que los investigados presenten los alegatos de conclusión, alegatos que se convierten en una garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

De conformidad con lo preceptuado por el citado artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, siendo esta una garantía

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

de rango constitucional fundamental, exigida en los procesos administrativos, con el fin de preservar el respeto por los procedimientos adelantados por la administración pública.

El mismo artículo 29 señala, que quien sea sindicado tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, garantizando de esa forma, el ejercicio del derecho de defensa y el derecho de contradicción de la prueba.

De acuerdo con los Artículos citados anteriormente, es necesario referir la importancia que reviste la aplicación y observancia del derecho al debido proceso, del cual se derivan una serie de premisas que garantizan la protección de los derechos de los ciudadanos, frente a las actuaciones de la administración. Al respecto la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-540 del 23 de octubre de 1997 señala:

“El debido proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como un derecho de rango fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y 85) que rige para toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiéndolas a los procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que los sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las distintas autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y mediante el otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa necesarios, de manera que garanticen la legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se adopten.

De esa forma, se asegura la prevalencia de las garantías sustantivas y procesales requeridas, la imparcialidad del juzgador y la observancia de las reglas predeterminadas en la ley a fin de esclarecer los hechos investigados, así como la práctica, contradicción y valoración de las pruebas recaudadas y allegadas y la definición de los responsables y sus respectivas sanciones”.

En efecto, uno de los derechos inmersos dentro del derecho al debido proceso contenido en el Artículo 29 constitucional, es el derecho de contradicción de la prueba, del cual la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 18 de julio de 1985, Magistrado Ponente Dr Horacio Montoya Gil, manifestó lo siguiente:

“Entre los principios que han de observarse en la producción y aportación de la prueba al proceso, se halla el de la contradicción, según el cual la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, es decir, la prueba debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes”.

Sin embargo, la Ley 1333 de 2009 no contemplo dentro de su articulado la etapa de alegatos de conclusión, sino que de la etapa del periodo probatorio pasa directamente a la etapa de determinación de la responsabilidad del presunto infractor; pero la Ley 1437 (CPACA) por vía de reenvío llenó el vacío normativo existente en la Ley 1333 de 2009 al consagrar en su artículo 47 lo siguiente:

“Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes”.

La ya citada Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagra: *“Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.*

Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos” (negrillas fuera del texto original).

Sobre la citada remisión normativa se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera radicación: 2300123330002014001880 del 17 de noviembre de 2017, manifestando lo siguiente:

“[L]a Sala estima pertinente referirse a la importancia de los alegatos de conclusión dentro del trámite de procesos judiciales y de procedimientos administrativos, para lo cual hacemos nuestras las reflexiones esgrimidas por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-107 de 2004, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería [...] La Sala resalta que las garantías

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

integrantes del debido proceso administrativo imponen, ante el vacío que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión, la aplicación del artículo 47 del CPACA [...], haciendo a su vez aplicable el artículo 48 del CPACA que contempla la etapa de alegatos de conclusión [...] El vacío legal expuesto ya ha sido estudiado por la doctrina, la cual es partidaria de la aplicación del artículo 48 del CPACA [...] Tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo de Córdoba, la aplicación del artículo 47 del CPACA permite proteger las garantías del debido proceso administrativo ante el vacío de la Ley 1333, en particular aquellas referidas a: «[...] (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción [...]», el cual no se encuentra plenamente protegido al no establecerse, con precisión y claridad, las sanciones o medidas que serían procedentes dentro del catálogo previsto en el artículo 40 de la Ley 1333 puesto que, como lo señaló la primera instancia, esto impide al presunto infractor «[...] tener la información suficiente para planificar su defensa jurídica y examinar si puede existir visos de proporcionalidad y razonabilidad en las consideraciones iniciales que hagan la autoridad ambiental [...]». La interpretación prohijada por la Sala lo único que hace es aplicar una regla de reenvío que se encuentra en el CPACA que tiene como único objetivo completar los vacíos existentes en la Ley 1333, sin quebrantar de modo alguno la naturaleza especial del procedimiento sancionatorio ambiental”.

Así las cosas, y con base en la normatividad y jurisprudencia citados en los acápites anteriores, procede esta autoridad ambiental por medio del presente acto administrativo, a ordenar el traslado por el termino de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que los señores **JUAN CARLOS ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1,045.106.576, **LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, **LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, **YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.091218.818 y **YERZON MURILLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035, presenten los alegatos de conclusión dentro del presente proceso; de conformidad con lo consagrado en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de la remisión hecha desde el artículo 47 de la misma ley.

Finalmente, se le informa al presunto infractor que el expediente **DTAO JUR 16.4.001 2020 PNN NEVADOS**, que se adelanta en su contra, reposa en la sede administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques nacionales Naturales de Colombia, ubicada en la calle 42 No. 47-21, Torres de Bomboná, en la ciudad de Medellín, Antioquia y se encuentra a su disposición, puesto que los documentos ambientales tienen el carácter de públicos, salvo que la Constitución o la ley los clasifique como información clasificada y reservada, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 y el Concepto No.5947 del 30 de marzo del 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, por lo anterior el Director Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia,

DECÍDE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el traslado por el término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que los señores **JUAN CARLOS ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1,045.106.576, **LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, **LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, **YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.091218.818 y **YERZON MURILLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035, presente los alegatos de conclusión dentro del presente proceso, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR LA NOTIFICACIÓN a los señores **JUAN CARLOS ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1,045.106.576, **LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.056.302.402, **LUIS FELIPE ANGEL VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.144.183.291, **YUTH BRAYNER HERNANDEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.091218.818 y **YERZON MURILLO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.093.226.035, del contenido del presente acto administrativo, conforme lo establece el

“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DTAO-JUR 16.4.001 de 2020-PNN LOS NEVADOS”

artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO TERCERO: COMISIONAR a la jefe del PNN LOS NEVADOS a realizar las diligencias ordenadas en el artículo segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

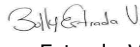
Dado en Medellín, el 17 de octubre de 2023


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR
Director Territorial Andes Occidentales
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Expediente: DTAO JUR 16.4.001 2020 PNN NEVADOS

Elaboró: 
Zully Dayana Estrada V.
Abogado Contratista
DTAO

Revisó: 
Karol Viviana Ramos Núñez
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo
DTAO

Aprobó:
Jorge Eduardo Ceballos Betancur
Director Territorial Andes Occidentales